



Un nuevo contrato social para una recuperación sostenible

Declaración de la Agrupación Global Unions a las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, abril de 2023

La respuesta inadecuada a la crisis del costo de la vida, la pandemia de COVID-19 y los considerables retrasos para hacer frente a la crisis climática ponen de relieve la urgente necesidad de una reforma integral del sistema multilateral.

Guiados por la demanda del movimiento sindical internacional respecto a un nuevo contrato social, nos sumamos al llamamiento reclamando reformas que permitan a las Instituciones Financieras Internacionales (IFI) –el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial– liderar una expansión sin precedentes de inversión pública con vistas a la creación de trabajo decente, permitir un crecimiento equitativo, construir una economía más resiliente y cumplir las ambiciones de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Para hacer frente a los actuales desafíos, el FMI y el Banco Mundial deben demostrar:

- Un liderazgo decidido para la resolución sostenible de la deuda

Con los países luchando con las repercusiones a largo plazo de la pandemia de COVID-19, la guerra en Ucrania, la inflación y el ajuste monetario, se han incrementado los riesgos de una crisis sistémica de la deuda soberana; y es la gente trabajadora en el mundo entero quien paga las consecuencias. El estancamiento económico en Túnez ha provocado el encarcelamiento de sindicalistas; Ghana se enfrenta a un potencial retroceso tras años de progresos en sanidad y educación; trabajadores y trabajadoras en Pakistán, Sri Lanka y Zambia llevan meses esperando un alivio significativo ante el desastre económico.

Para lograr los ODS y restaurar su credibilidad a la hora de supervisar una economía global próspera y estable, las IFI han de gestionar una serie de mejoras, pendientes desde hace ya tiempo, respecto a procesos y plazos para la resolución de la deuda, que obliguen a todos los acreedores –públicos y privados– a aprobar un alivio de la deuda rápido, extenso y a largo plazo en beneficio de poblaciones considerablemente afectadas.

Dichas reformas constituirían apenas un primer paso de un esfuerzo reavivado con vistas al establecimiento de mecanismos permanentes para la restructuración de la deuda soberana. La privatización y la austeridad no son el antídoto para la crisis de la deuda, sino que reiteradamente han prevenido el crecimiento y erosionado la capacidad de los países para reembolsar su deuda, ocasionando además mayor desigualdad y privaciones. Teniendo en cuenta los múltiples desafíos a que se enfrentan los países en la actualidad, recurriendo a políticas de austeridad anticuadas se corre el riesgo de entrar nuevamente en un ciclo de endeudamiento que amenazaría los medios de subsistencia de la gente trabajadora y sus aspiraciones durante años.

- Apoyar el trabajo decente y la protección social universal

La crisis del costo de la vida ha erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras, pero los bancos centrales se concentran en bajar los salarios incluso en ausencia de espirales salarios-precios. Entre tanto, la pandemia de la COVID-19 y las recientes crisis económicas han expuesto lo profundamente inadecuada que resulta la protección social existente para los trabajadores/as vulnerables. Estas cuestiones deben entenderse conjuntamente: un sistema financiero liberalizado fomenta la especulación y desalienta la inversión a largo plazo, mientras que las grandes empresas y los más ricos hacen que suban los precios, ocultan sus activos y socavan la recaudación fiscal estatal.

La solución a este desequilibrio ha de ser tan ambiciosa como lo es el problema: pleno empleo respetando las normas de salud y seguridad en el trabajo y con una sólida protección legal universal del trabajo decente. Esto, complementado por una protección social universal, constituye la vía más clara hacia una sociedad más próspera y justa.

Para permitir un crecimiento equitativo y sostenible, alentamos a las IFI a dar muestras de liderazgo respecto a políticas generadoras de pleno empleo, que promuevan el trabajo decente y amplíen la protección social. Implica asumir el liderazgo en relación con cuestiones macroeconómicas, incluyendo un enfoque matizado de la inflación, poner énfasis en la solidaridad social y la fiscalidad progresiva, y en la financiación del adoptar un enfoque robusto para asegurar que los trabajadores y las trabajadoras disfruten de los derechos garantizados por políticas de salvaguardia medioambiental y social. Requiere una diligente defensa de la libertad sindical y el derecho a la negociación colectiva en todos los países.

- Liderazgo respecto a una rendición de cuentas democrática sobre inversiones

Resulta evidente la necesidad de unos niveles sin precedentes de inversión a nivel global en resiliencia económica, servicios públicos y el trabajo en cuidados, así como en energía renovable e infraestructura. Pero aunque que los sistemas de privatización, desregulación y financiarización pueden ofrecer una inyección de fondos a corto plazo, históricamente han socavado la calidad del empleo y la aportación de servicios, exacerbando el fraude y la informalidad.

La aportación de financiación privada para el desarrollo no debe diluir las voces de la población a la que se supone que ha de servir, ni disminuir o reemplazar la inversión pública. Un robusto diálogo social y la rendición de cuentas democrática sobre proyectos e inversiones resultan cruciales para asegurar no sólo el éxito de los programas sino también la continua legitimidad democrática de la labor en financiación para el desarrollo.

El Banco Mundial y el FMI son destacadas instituciones multinacionales y poderosos canales para unas inversiones muy necesarias. En ese sentido, les pedimos que refuercen la supervisión democrática de la financiación para el desarrollo y el diálogo social en relación con los proyectos de desarrollo.

- Compromiso a una transición justa para la gente trabajadora

El último informe del IPCC reafirma que la gente trabajadora, sus familias y sus comunidades se verán afectadas por lo que el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha denominado la "bomba de tiempo" del cambio climático. La transición hacia energías limpias implica un tremendo giro económico y debería suponer también una oportunidad para estimular un desarrollo justo y sostenible. El hecho de no afrontar este desafío no sólo resulta peligroso para quienes trabajan en el sector de la energía y sus comunidades, sino que haría prácticamente imposible un crecimiento inclusivo y de base amplia, poniendo en peligro la legitimidad política de la transición energética y el combate contra la crisis climática.

Una transición justa supone prestar la debida atención a los trabajadores/as de la energía desplazados, pero también exigir que los empleos creados por la nueva economía energética ofrezcan salarios adecuados, lugares de trabajo que respeten la salud y seguridad, protección legal respecto a la libertad sindical, la representación sindical y la negociación colectiva. Ha de ir más allá del sector energético, abarcando agricultura, infraestructura, industria, transporte y otros sectores. Si unos puestos de trabajo adecuados, pero con altas emisiones de carbono, son remplazados por peores empleos, la transición no sólo constituirá una oportunidad perdida, sino que además supondrá dar un paso atrás.

El Banco Mundial y el FMI deben trabajar con los sindicatos para asegurarse de que la transición energética sea una oportunidad para ofrecer trabajo decente y una energía asequible y sostenible para todos.

- Desvío de inversiones y una recuperación divergente

En los últimos meses varios países han diseñado planes para recortar el derecho de huelga o reprimir activamente las protestas, encarcelando a líderes sindicales y expulsando observadores internacionales. Mientras que los bancos centrales intervienen para sostener al sector financiero frente a los efectos de la subida de tipos de interés, muchos trabajadores/as sufren las consecuencias de los recortes de empleo y la inflación que han erosionado sus salarios. Aunque no hay evidencias de una espiral salarios-precios que esté atizando la inflación, la austeridad y los recortes dejan poco margen para el crecimiento o el optimismo. Desgraciadamente, la historia nos ha enseñado que estas prescripciones no hacen sino exacerbar las causas subyacentes de la crisis económica.

Los desafíos fundamentales que afrontan nuestras comunidades y economías no han cambiado: una falta de inversión crónica en la economía real y burbujas especulativas que provocan crisis periódicas constituyen las dos caras de una misma moneda. La crisis de la COVID-19, los efectos de la invasión rusa en Ucrania y el caos climático han puesto de manifiesto la dramática necesidad de invertir en cuidados y en servicios de calidad del sector público, incluyendo la educación, así como la fragilidad e insuficiencia de los sistemas de protección social existentes y la importancia de efectuar inversiones en energía sostenible y

resiliencia económica. El problema en todos los casos es una inversión insuficiente, y la austeridad no hará sino exacerbarlo.

La edición más reciente del informe Perspectivas Económicas Mundiales del Banco Mundial predice tasas de inversión históricamente bajas en los mercados emergentes durante los próximos años. Si a esto sumamos la deuda existente, las tasas de interés crecientes y unos mercados volátiles, todo apunta a una “recuperación” que dejará un mundo todavía más desigual. Esta trayectoria no sólo impedirá el logro de los ODS, sino que hará que resulte imposible un crecimiento de base amplia e inclusivo en los países en desarrollo, con la erosión de empleos decentes, la contracción de la base impositiva y la pérdida de legitimidad democrática.

Detrás de esta falta de inversión sistémica está la especulación financiera y la concentración corporativa. Mientras que los salarios de la gente trabajadora y las reservas de los países tienen cada vez menor valor, la escalada de precios por parte de las empresas y la manipulación financiera han sentado las bases para la obtención de enormes beneficios. Empresas de la economía gig basadas en aplicaciones han establecido rápidamente monopolios internacionales en ciertos servicios asegurándose beneficios, mientras que en ciudades del mundo entero los costos de la vivienda se disparan para los residentes debido a los precios exorbitantes que se pagan por alquileres a corto plazo. En casi todos los casos, se consiguen obtener beneficios privados considerables como resultado del déficit en servicios públicos y la falta de inversión en infraestructura de transportes, vivienda, educación, sanidad y otras necesidades humanas.

Se requiere una reforma económica integral e inversiones masivas para responder a los enormes desafíos a los que se enfrenta la humanidad en este momento, y para revertir esta trayectoria económica inadecuada, divergente y contraproducente. Para hacer frente a la inflación de valores, la corrupción y la especulación financiera, ciertas reformas de gobernanza –como una fiscalidad progresiva– han de ir a la par de amplias inversiones en bienes públicos.

Durante demasiado tiempo la gente trabajadora ha cargado con los costos de crisis económicas de las que no tuvo culpa alguna, mientras que los más ricos obtenían beneficios. En lugar de reprimir y criminalizar huelgas y protestas, los Gobiernos deberían reafirmar su legitimidad democrática estableciendo una economía que pueda aportar un crecimiento sostenible de amplia base.

Recomendaciones a las IFI

- Trabajar con los Gobiernos y los sindicatos para apoyar un nivel sin precedentes de inversión pública para satisfacer las necesidades sociales, impulsar la creación de empleo y construir un futuro sostenible y equitativo. Estas inversiones deben mejorar la protección de los derechos laborales y humanos, incluyendo la libertad sindical y la ampliación de la negociación colectiva como medio para mejorar la calidad del empleo, asegurar la salud y la seguridad, garantizar el aprendizaje permanente y distribuir de forma justa las ganancias y las pérdidas en tiempos de incertidumbre.
- Asegurarse de que la financiación privada para el desarrollo no desplace la inversión pública, socave el respeto a la legalidad ni erosione la rendición de cuentas

democrática, sino que se utilice para fines públicos y contribuya a generar un crecimiento inclusivo y trabajo decente.

- Proporcionar asistencia técnica a aquellos Gobiernos que quieran introducir sistemas fiscales justos y políticas industriales con objeto de mantener las ganancias del desarrollo a nivel local.
- Apoyar una fuerte inversión en sanidad y otros trabajos de cuidados con vistas a la recuperación de la pandemia de COVID-19 y prepararse para afrontar futuras crisis de salud pública y abordar necesidades sociales no cubiertas.
- Apoyar y promover una mayor inversión en educación pública a todos los niveles, asegurando que todos los niños y niñas cuenten con docentes debidamente formados y cualificados.
- Promover la mejora de las normas de salud y seguridad en el trabajo mediante la ratificación y aplicación de los principales Convenios de la OIT en materia de salud y seguridad, así como del Convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, y la inclusión de sus principales requisitos en las políticas y estrategias de inversión de las IFI.
- Garantizar el trabajo decente para los trabajadores y trabajadoras afectados por cualquier proyecto de transición verde, incorporando un diálogo social sólido en la planificación y ejecución de proyectos y la aportación de oportunidades de formación pública de calidad para apoyar la mejora de competencias y el aprendizaje permanente.

Recomendaciones al FMI

- Apoyar un mecanismo integral, justo y vinculante para reestructurar la deuda soberana de acuerdo con la Resolución A/RES/69/319 de la ONU e incorporar la necesidad de inversiones sociales y sobre el clima en los análisis de la deuda, en línea con los ODS.
- Desalentar la especulación financiera y promover la inversión productiva y políticas de generación de ingresos con un reparto del crecimiento económico y que no rebajen el nivel de vida de la gente trabajadora.
- Promover la fiscalidad progresiva y asistir a los Gobiernos en la aplicación de medidas destinadas a incrementar la recaudación de ingresos de manera justa, incluyendo impuestos de sociedades más elevados, tasas sobre las transacciones financieras, impuestos sobre la fortuna y sobre los beneficios imprevistos. Esto debería incluir una estrecha colaboración con la ONU y la OCDE en cuanto a la reforma impositiva.
- Poner fin a las limitaciones de la masa salarial pública que socavan y exacerban la escasez de trabajadores/as públicos esenciales en sanidad, educación e infraestructura. Este personal resulta indispensable para el logro de los ODS y garantizarles condiciones de trabajo dignas es esencial para garantizar servicios públicos de calidad.
- Poner fin a los recargos regresivos y contraproducentes que endeudan aún más a los países con problemas económicos.

- Apoyar los derechos especiales de giro (DEG) y ayudar en su reasignación de los países de renta alta a los países en desarrollo a través de fondos fiduciarios específicos, transferencias directas u otras instituciones.
- Promover las normas básicas de salud y seguridad en el trabajo para permitir niveles más altos de productividad, reducir la necesidad de gasto en prestaciones de salud y discapacidad, y evitar que los trabajadores pierdan ingresos debido a enfermedades y lesiones relacionadas con el trabajo.

Recomendaciones al Grupo del Banco Mundial:

- Desalentar una peligrosa carrera hacia el fondo en cuanto a las normas internacionales del trabajo, omitiendo los indicadores laborales y fiscales y de contribución del informe propuesto sobre el Entorno más propicio para los negocios.
- Desarrollar un Informe sobre Empleo que promueva la inversión en trabajo decente e incorpore las normas internacionales del trabajo, incluyendo salarios justos, protección de la salud y seguridad, derechos sindicales, diálogo social y negociación colectiva.
- Apoyar las inversiones en protecciones sociales universales que luchen contra la pobreza y promuevan la equidad de manera eficaz.
- Dejar de promover la privatización como medio para apoyar el desarrollo y favorecer en cambio una mayor inversión en servicios públicos.
- Garantizar que todos los préstamos procedentes del Grupo del Banco Mundial se ajusten a las normas internacionales del trabajo.
- Pasar decididamente a mejorar el cumplimiento de las salvaguardias laborales en la financiación para el desarrollo colaborando con los sindicatos desde las etapas iniciales del proceso de inversión, empleando la experiencia del movimiento sindical en relación con la diligencia debida y convocando a sindicatos y clientes del banco para mantener discusiones sustantivas.
- Implementar soluciones específicas a cada sector para mejorar el cumplimiento de las normas laborales en la financiación para el desarrollo, incluyendo la Política de Cumplimiento propuesta para el sector hotelero.
- Incorporar en los proyectos sobre desarrollo plazos firmes para identificar las violaciones de las normas de desempeño, implementar planes de acción correctiva que se ajusten al plazo establecido, resolver las violaciones y reparar posibles daños.
- Recopilar y divulgar datos relativos a la cantidad y calidad de empleos creados por las inversiones de las IFI en el desarrollo, para facilitar la continua mejora de su impacto y asegurar que los proyectos de las IFI contribuyan a un crecimiento inclusivo.
- Garantizar que las contribuciones a la financiación de la lucha contra el cambio climático incorporen criterios de transición justa que se ajusten al Acuerdo de París y a la declaración "Apoyando las condiciones para una transición justa internacionalmente" de la COP26.